



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ
D.C.

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2019-00231
PROCESO: CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
CONVOCANTE: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
CONVOCADA: LYNAL DEL CARMEN MORDECAY DUNOYER

La Procuraduría 138 Judicial II para Asuntos Administrativos, remitió solicitud de aprobación o improbación de la conciliación extrajudicial, celebrada entre la apoderada de la convocante **Superintendencia de Industria y Comercio** y el apoderado de la convocada **Jairo Humberto Navarrete Rodríguez**, según acta calendada el 20 de mayo de 2019, celebrada dentro de la Conciliación Extrajudicial No. 6288/86 del 5 de marzo de 2019, donde se decidió conciliar los valores adeudados por dicha entidad a la convocada al no incluir como parte integrante la asignación básica la reserva especial del ahorro y la posterior liquidación de la **prima de actividad y la bonificación por recreación**, por el periodo comprendido entre el **27 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2018**.

Por lo anterior y con el fin de cumplir la función encomendada al Juez Administrativo en el artículo 24 de la Ley 640 de 2001, es pertinente **AVOCAR Y DECIDIR LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL**, como sigue a continuación.

I. PARÁMETROS DEL ACUERDO CONCILIATORIO

i. La entidad convocada, propuso conciliar la inclusión de la reserva especial de ahorro como factor salarial para liquidar los factores salariales devengados por la señora **LYNAL DEL CARMEN MORDECAY DUNOYER**, denominados prima de actividad y bonificación por recreación, por un monto total de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE (\$2.840.925)**, correspondiente al valor del reajuste de los factores señalados.

ii. Se concilió la indexación, junto con los intereses de la suma antes plasmada, no habiendo lugar al pago de los mismos.

iii. La parte convocada desiste de cualquier acción legal en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, basada en los mismos hechos que dieron origen a la audiencia de conciliación, es decir, a la reliquidación de la prima de actividad y bonificación por recreación en los periodos comprendidos en la conciliación.

iv. El valor a cancelar corresponde al dinero dejado de percibir por la exclusión de la reserva especial del ahorro en los emolumentos antes citados, en los tres últimos años al momento de liquidar.

v. Las sumas reconocidas serán canceladas dentro de los 70 días siguientes a la radicación de la solicitud de pago.

La convocada, a través de escrito radicado el 30 de noviembre del año 2018, manifestó estar de acuerdo con la oferta conciliatoria realizada por la entidad convocante, en su totalidad.

II. PRUEBAS

Como respaldo del acuerdo conciliatorio, se arribó al trámite los siguientes documentos:

a. Certificación expedida por el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la cual indica los parámetros de la formula conciliatoria (fl.13)

b. Con memorando No, 18-244545- -7-0 del 15 de enero de 2019, se corre traslado del expediente relacionado con la aceptación a la formula conciliatoria presentada por la Superintendencia a favor de la señora Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer. (fl. 19)

c. Por medio de derecho de petición elevado el 27 de septiembre de 2018, la señora Mordecay Dunoyer, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio el reconocimiento y pago de las diferencias generadas en los factores denominados prima de actividad, bonificación por recreación, prima de servicios e indexación de la prima de alimentación, al omitir la Reserva Especial del Ahorro en la liquidación correspondiente (fls. 15-16).

d. En respuesta a lo anterior, a través de oficio fechado 4 de octubre de 2018, con radicado 18-244545- - 2-0, la Superintendencia de Industria y Comercio le informó a la señora Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer, la decisión de conciliar lo relacionado con el reajuste de la prima de actividad y la bonificación por recreación, incluyendo la reserva especial del ahorro como factor de liquidación, manifestando en el mismo, las razones por las cuales no se concilia la prima de servicios y la indexación de la prima de alimentación (fl. 17-18).

e. En atención a lo anterior, la señora **Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer**, radicó respuesta ante la Superintendencia de Industria y Comercio el día 19 de octubre del 2018, aceptando la propuesta de adelantar los trámites pertinentes para realizar la conciliación, sin embargo, allí solicita el envío de la respectiva liquidación para su correspondiente análisis. (fl. 19).

f. Obra en el plenario, liquidación básica de conciliación, en la cual se puede observar los valores liquidados bajo los parámetros de la formula conciliatoria. (fls. 20-21)

g. A folio 22 del plenario, se observa escrito radicado el 30 de noviembre de 2018 ante la SIC, en el cual la convocada manifiesta estar de acuerdo con la liquidación realizada por la entidad convocante. (fl. 22)

h. La señora **Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer**, ha prestado sus servicios a la Superintendencia de Industria y Comercio desde el 17 de febrero de 1917 de febrero de 2012, ocupando actualmente el empleo de Profesional Universitario (Prov) 2044-09 de la planta global asignado a la Dirección de Nuevas Creaciones – Grupo de Trabajo de Ciencias Farmacéuticas y Biológicas (fl. 24).

III. CONSIDERACIONES

El artículo 24 de la Ley 640 de 2001, enuncia que las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia contenciosa administrativa se remitirán dentro de los tres días siguientes al "*Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que le imparta su aprobación o improbación*".

Por su parte, mediante la expedición del Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, 1069 de 2015, reglamentario del artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2009, se determinaron los asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contenciosa administrativa y su artículo 2.2.4.3.1.1.2., estableció lo siguiente:

"Artículo 2.2.4.3.1.1.2. Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de los medios de control previstos en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1º. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo;

- Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario.
- Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
- Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado.

Parágrafo 2°. El conciliador velará porque no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles.

Parágrafo 3°. Cuando el medio de control que eventualmente se llegare a interponer fuere la de nulidad y restablecimiento de derecho, la conciliación extrajudicial sólo tendrá lugar cuando no procedan recursos en vía gubernativa o cuando esta estuviere debidamente agotada, lo cual deberá acreditarse, en legal forma, ante el conciliador.

Parágrafo 4°. En el agotamiento del requisito de procedibilidad del medio de control de qué trata el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entenderá incluida de repetición consagrada en el inciso tercero de dicho artículo.

Parágrafo 5°. El agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, no será necesario para efectos de acudir ante tribunales de arbitramento encargados de resolver controversias derivadas de contratos estatales.”

En este sentido, si bien es cierto que la conciliación prejudicial en materia administrativa es una de las vías más rápidas y no litigiosas para la solución de conflictos, no es menos cierto que debe cumplir con las exigencias requeridas dentro del marco de la Constitución Política, las Leyes 23 de 1991, 446 de 1998, 640 de 2001 y 1285 de 2009, para su consecuente aprobación.

Así, tenemos que los requisitos para la aprobación del acuerdo extrajudicial son los siguientes, tal como lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado en providencia del 18 de julio de 2007, Rad .1998-00249-0 1(28106) con ponencia de la Doctora Ruth Stella Correa Palacio:

- “1.** Que no haya operado el fenómeno de la caducidad (art. 61 ley 23 de 1991, modificado por el arto 81 ley 446 de 1998).
- 2.** Que el acuerdo conciliatorio verse sobre acciones o derechos económicos disponibles por las partes (art. 59 ley 23 de 1991 y 70 ley 446 de 1998).
- 3.** Que las partes estén debidamente representadas y que estos representantes tengan capacidad para conciliar.
- 4.** Que el acuerdo conciliatorio cuente con las pruebas necesarias, no sea **violatorio de la ley** o no resulte lesivo para el patrimonio público (art. 65 A ley 23 de 1991 y arto 73 ley 446 de 1998).”

Dichos requisitos deben concurrir simultáneamente, porque al faltar uno de ellos, la conciliación debe ser improbadada.

Acorde a los lineamientos expresados, **EL DESPACHO APROBARÁ LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL** por los siguientes motivos:

1. No ha operado el fenómeno de la caducidad.

El asunto materia de conciliación es susceptible de reclamarse judicialmente a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), pues se trata del reconocimiento y pago a favor de la señora Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer, de la diferencia causada por la no inclusión de la denominada reserva especial del ahorro como parte integrante de la asignación básica para la liquidación de la prima de actividad y la bonificación por recreación, en su calidad de empleado público de la Superintendencia de Industria y Comercio por el periodo comprendido entre el **27 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2018**.

El Despacho precisa que la conciliación adelantada conforme a los medios de prueba allegados al plenario, surte sus efectos para el reajuste de los factores denominados, **prima de actividad y bonificación por recreación**, por haberse omitido la inclusión de la reserva especial de ahorro dentro de la asignación básica y la consecuencial liquidación de dichos factores por el periodo comprendido entre el **27 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2018**, por haberse presentado la solicitud de reconocimiento el **27 de septiembre de 2018**.

Por lo anterior, la convocante tiene derecho al reajuste de los aludidos factores en razón de su vínculo laboral con la Superintendencia de Industria y Comercio y que no fueron considerados dentro de la liquidación a la servidora pública.

Así las cosas, al no haberse reconocido los valores del reajuste por omitir la reserva especial del ahorro en la asignación básica y la posterior liquidación, de los factores denominados **prima de actividad y bonificación por recreación**, a la señora Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer en el periodo comprendido entre el **27 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2018**, es claro que el medio de control correspondiente no se encontraba caducado y respeta el criterio de prescripción en torno a los derechos laborales que de tres años contados a partir de que se hizo exigible el derecho a reclamar.

2. El acuerdo versa sobre derechos económicos disponibles.

Se observa, que el reclamo se refiere de manera concreta al pago de los valores adeudados por concepto de la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro en la asignación básica para la posterior liquidación de la **prima de actividad y la bonificación por recreación**, para el periodo comprendido entre el **27 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2018**, siendo un

asunto que si bien concierne derechos laborales ciertos e indiscutibles, son de connotación económica, por lo que son susceptibles de transacción bajo tales condiciones, máxime cuando de lo pretendido y del acuerdo se verifica que el convocante tiene derecho a la prestación reclamada, pues así se desprende de la formula conciliatoria presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Las partes están debidamente representadas.

La parte convocante actúa mediante apoderado judicial con facultades para conciliar, conforme al poder visible a folio 9.

De igual manera, el apoderado de la parte convocada, también lo hizo conforme al poder otorgado y que obra a folio 23 del plenario, en donde se le faculta para conciliar.

4. El acuerdo no viola la ley, cuenta con las pruebas necesarias y no afecta el patrimonio público.

Pues bien, la señora Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer, según se desprende de la información allegada a la actuación reclamó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el reconocimiento y pago de los valores adeudados por concepto de la diferencia causada por la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro en la asignación básica para la liquidación de la **prima de actividad y bonificación por recreación**, emolumentos percibidos por la convocante.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en providencia calendada el 10 de mayo de 2001, al desatar la consulta presentada por el entonces Superintendente de Sociedades, en el sentido de establecer la viabilidad del reconocimiento de la prima de servicio y la prima semestral de forma simultanea para los empleados de esa entidad pública, realizó un recuento histórico de la evolución de la Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades Corporanónimas, bajo un criterio temporal en el cual se definió igualmente la titularidad del reconocimiento de algunas prestaciones económicas a favor de los trabajadores y empleados de la entidad.

La Corporación en su momento expresó:

“1. La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades – Corporanónimas. Por ser de interés para la consulta, deben destacarse los siguientes puntos en el desarrollo de la actividad de Corporanónimas:

1) La resolución 97 de 1946 del Ministerio de Gobierno reconoció la personería jurídica a la Corporación de Empleados de la Superintendencia de Sociedades Anónimas.

2) Esta superintendencia había sido creada por la ley 58 de 1931 y su régimen presupuestal fue fijado por el decreto 142 de 1951, cuyo artículo 6º dispuso que las prestaciones sociales de sus empleados serían atendidas por la corporación.

3) La resolución 7333 de 1977 del Ministerio de Justicia aprobó los estatutos de la corporación y le autorizó el uso del acrónimo "Corporanónimas".

4) La corporación pasó a llamarse Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades -Corporanónimas- y luego fue reestructurada en la llamada "modernización del Estado", mediante el decreto con fuerza de ley 2156 de 1992, el cual determinó que "es un establecimiento público, del orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico" (art. 1º) y la calificó de entidad de previsión social, al establecer su objeto en el artículo 2º en los siguientes términos:

"La Corporación Social de la Superintendencia de Sociedades, CORPORANONIMAS, como entidad de previsión social, tendrá a su cargo el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, económicas y médico asistenciales consagradas en las normas vigentes para los empleados públicos de las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades, de Valores, de la misma Corporación, en la forma que dispongan sus estatutos y reglamentos internos, de acuerdo con las normas legales y reglamentarias".

En desarrollo de este objeto, el artículo 3º del mismo decreto enumeró las funciones de la corporación, dentro de las cuales conviene resaltar las dos primeras, a saber:

1. Organizar, dirigir y administrar el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, económicas y médico asistenciales de los empleados públicos de las Superintendencias de Industria y Comercio, de Sociedades, de Valores y de la misma Corporación.
2. Atender las prestaciones a que se obligue en favor de sus afiliados, beneficiarios, pensionados y adscritos especiales.

5) El decreto ley 1695 del 27 de junio de 1997 dispuso la supresión de Corporanónimas y ordenó su liquidación. En el artículo 12 le asignó a las respectivas superintendencias el pago de los beneficios económicos que ella tenía a su cargo. Este artículo establece lo siguiente:

"Pago de beneficios económicos.- El pago de los beneficios económicos del régimen especial de prestaciones económicas de los empleados de las superintendencias afiliadas a Corporanónimas, contenido en los decretos 2739 de 1991, 2156 de 1992, 2621 de 1993, 1080 de 1996 y el acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, en adelante estará a cargo de dichas superintendencias, respecto de sus empleados, para lo cual en cada vigencia fiscal se apropiarán las partidas presupuestales

necesarias en cada una de ellas, en los mismos términos establecidos en las disposiciones mencionadas en el presente artículo".

Como se advierte, los beneficios económicos contemplados en el acuerdo 040 de 1991 de la Junta Directiva de Corporanónimas, entre los que se cuentan la prima de actividad anual, llamada anteriormente prima por año de servicio, y la prima semestral que favorecían a los empleados públicos de la Superintendencia de Sociedades quedaron "legalizados" con esta norma de rango legal y mantienen su vigencia."¹

Conforme a lo expuesto, es claro que la Superintendencia de Sociedades, asumió el reconocimiento de las prestaciones económicas contenidas en el Acuerdo 040 de 1991, por el cual se establece el reglamento general de servicios.

Al desarrollar el capítulo de las prestaciones económicas, en el artículo 58 del Acuerdo 040 de 1991, se consagró la reserva especial del ahorro, con el siguiente alcance:

"Artículo 58. Contribución al fondo de empleados. Reserva especial del ahorro. Corporanónimas contribuirá con sus aportes al Fondo de empleados de la Superintendencia de Sociedades y Corporanónimas, entidad con personería jurídica reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Para tal fin pagará mensualmente a sus afiliados forzosos una suma equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del sueldo básico, prima de antigüedad, prima técnica, y gastos de representación; de este porcentaje entregará Corporanónimas directamente al Fondo el quince por ciento (15%), previa deducción de la cotización que sea del caso por concepto de la afiliación de los beneficiarios. Los afiliados forzosos contribuirán mensualmente al Fondo con el cinco por ciento (5%) de las asignaciones básicas mensuales fijadas por la ley."

Adicionalmente dicho Acuerdo, determinó que Corporanónimas reconocería y pagaría las primas y demás reconocimientos determinados por la ley.

En lo que respecta a la reserva especial del ahorro, el Consejo de Estado ha determinado que dicho emolumento constituye factor salarial y así fue concebido desde el primer pronunciamiento judicial que sobre el particular hizo la Corporación de cierre de lo Contencioso Administrativo².

Por consiguiente, la liquidación de la reserva especial del ahorro como parte de la asignación básica en razón a su naturaleza salarial, es uno de aquellos elementos que retribuye directamente la prestación del servicio y en el entendido que los artículos 44 del Acuerdo 040 de 1991 y 144 del Decreto 708 de 2009, al fijar la cuantía con fundamento en la asignación básica no excluían

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero ponente: CÉSAR HOYOS SALAZAR. Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil uno (2001). Radicación número: 1349. Actor: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

² CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION SEGUNDA - SUB-SECCION "A". Consejero ponente: NICOLAS PAJARO PEÑARANDA. Santafé de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y ocho (1.998). Radicación número: 13910. Actor: ALFREDO ELIAS RAMOS FLOREZ. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

la reserva especial del ahorro, circunstancia que ratifica la viabilidad del acuerdo conciliatorio suscrito por la señora **Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer** y la **Superintendencia de Industria y Comercio**.

Ahora bien, frente a las calidades particulares de la señora **Mordecay Dunoyer**, se tiene que actualmente labora en la Superintendencia de Industria y Comercio ubicada geográficamente en la ciudad de Bogotá, desde el 17 de febrero de 2012 hasta la fecha, y que ostenta la calidad de servidora pública desempeñándose en el cargo de Profesional Universitario (Prov) 2044-09 de la planta globalizada asignada a la Dirección de Nuevas Creaciones – Grupo de Trabajo de Ciencias Farmacéuticas y Biológicas (Fl.24).

Que el 27 de septiembre de 2018 el convocante, solicitó a la entidad pública el reconocimiento y pago de la reserva especial del ahorro en la liquidación de la asignación básica para la posterior liquidación de la prima de actividad y bonificación por recreación, factores afectados con la omisión en la aplicación del 65% de la Reserva Especial del Ahorro (fls.15-16).

La liquidación de los valores a reconocer a la convocada se encuentra a folio 21 del plenario.

Mediante certificación expedida por el Secretario Técnico del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, se señalaron los valores totales objeto de conciliación y respecto de los cuales ha de efectuarse el reajuste, conforme la solicitud presentada por la convocada, atendiendo los siguientes conceptos:

Funcionario y/o exfuncionario público	Fecha de liquidación Periodo que comprende Monto total por conciliar
Lyna del Carmen Mordecay Dunoyer	27/09/2015 AL 27/09/2018 \$2.840.925

En lo que respecta a las condiciones en las cuales se cumplirá la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio, se tiene que el Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, determinó que las condiciones generales en materia de las controversias suscitadas en la reliquidación de las asignaciones básicas con inclusión de la reserva especial del ahorro, concretándose en los siguientes lineamientos:

- 3.1.1 Que los convocados desistan de los intereses e indexación correspondientes a la prima de actividad y bonificación por recreación.*
- 3.1.2 Que los convocados desistan de cualquier acción legal en contra de la SIC basada en los mismos hechos que dieron origen a la audiencia de conciliación, las anteriores pretensiones y otras que den origen alguna acción legal, deberán ser destinadas por el convocado.*
- 3.1.3 Que la SIC con base en las diferentes sentencias en firme en contra de la misma, donde reconoce que la SIC debe liquidar la prima de actividad y*

bonificación por recreación, reconoce el valor económico a que tenga derecho el convocado por los últimos tres años dejados de percibir, conforme a la liquidación pertinente.

3.1.4 Que en el evento que se concilie, la Superintendencia de Industria y Comercio pagará los factores reconocidos en la presente audiencia de conciliación, dentro de los setenta (70) días siguientes a la aprobación del Juez Administrativo y a que la parte convocada presente ante la Entidad toda la documentación necesaria para adelantar el trámite requerido.”

En consecuencia, es procedente que la entidad realice el pago de los valores adeudados a la servidora pública por concepto de la diferencia causada en la omisión de la inclusión de la reserva especial del ahorro como parte integrante de la asignación básica para la posterior liquidación de la **prima de actividad y la bonificación por recreación**, pues como ha quedado evidenciado el convocante tiene derecho a dicho reconocimiento y la entidad realizó las operaciones relacionadas con el recalcule para efectos prestacionales para el periodo comprendido entre el **27 de septiembre de 2015 al 27 de septiembre de 2018**, conforme a la liquidación aportada por la entidad convocante, visible a folio 21 del plenario, y en ese sentido el despacho considera que lo reclamado tiene el sustento legal y jurisprudencial apropiado, es decir, es ajustado al ordenamiento jurídico.

Conforme a ello, se observa que en la liquidación efectuada por la entidad, en efecto se reconoce los valores adeudados por concepto de la diferencia causada en los factores denominados **prima de actividad y la bonificación por recreación**, que se causaron en el periodo antes indicado.

Así las cosas, se tiene que el acuerdo no es lesivo a los intereses y el patrimonio de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez que se concilió por el valor adeudado al convocado.

5. Orden de conciliar por parte del Comité de Conciliación.

Según se observa a folio 13 del expediente, que el comité de conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió conciliar el presente asunto, a favor de la señora **LYNA DEL CARMEN MORDECAY DUNOYER**, por la suma **DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$2.840.925)**

Lo anteriormente expuesto permite a ésta Jurisdicción, conforme a lo previsto en el Artículo 73 de la Ley 446 de 1998, que modificó el Artículo 65A de la Ley 23 de 1991, **APROBAR** la Conciliación Extrajudicial suscrita ante la Procuraduría 138 Judicial II para Asuntos Administrativos el día 20 de mayo de 2019, por la apoderada de la entidad convocante Doctora **YESICA STEFANNY CONTRERAS PEÑA** y el apoderado de la convocada, Doctor **JAIRO HUMBERTO NAVARRETE RODRÍGUEZ**, en razón a que el acuerdo conciliatorio se fundó en un objeto y causa lícitos, sin vicios en el

consentimiento de las partes, y sin que con él se lesionen los intereses del Estado, o afecte el patrimonio económico del Ente Público en lo que fue materia de conciliación, pues se trata de efectuar el pago de unos valores adeudados a un servidor público de la rama ejecutiva del poder público.

En relación al plazo para efectuar el pago se determinó que el mismo se realizaría dentro de los **setenta (70) días hábiles siguientes** a la incorporación de la integridad de los documentos necesarios para tal fin.

En virtud de lo expresado, el **JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN SEGUNDA,**

R E S U E L V E:

PRIMERO.- APROBAR LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL celebrada el 20 de mayo de 2019, dentro del expediente radicado con el No. 6288/86 del 5 de marzo de 2019, suscrita entre la apoderada de la entidad convocante **YESICA STEFANNY CONTRERAS PEÑA**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.015.430.088 y portadora de la tarjeta profesional No. 280.842 del Consejo Superior de la Judicatura, y el apoderado de la convocada, **JAIRO HUMBERTO NAVARRETE RODRÍGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No 19.260.238 y portador de la tarjeta profesional No. 71708 del Consejo Superior de la Judicatura, ante la Procuraduría 138 Judicial II para Asuntos Administrativos.

SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en los numerales 2º y 3º del artículo 114 del Código General del Proceso, aplicable a esta jurisdicción por remisión del art. 306 del C.P.A.C.A., la Secretaría expedirá copia de este proveído con sus respectivos anexos, la cual prestará merito ejecutivo en los términos del art. 2.2.4.3.1.1.13., del Decreto Único 1069 de 2015.

Para tal efecto, la parte interesada deberá consignar el valor de la certificación que asciende a la suma de seis mil pesos (\$6.000) en la cuenta del Arancel Judicial de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial No. 3-0820-000636-3 del Banco Agrario de Colombia.

TERCERO.- Una vez cumplido lo ordenado en el numeral anterior, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ORDINARIO** notifico a las partes la
providencia anterior hoy **5 DE JUNIO DE 2019**, a las ocho de la
mañana (8:00 a.m.)



LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA
SECRETARIA